16914 *ORDEN de 2 de julio de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 515.257.*

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso administrativo número 515.257, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Atilano Martínez Tomé; doña Pilar Puértolas Berni; doña Carmen González Puebla; don José Sánchez Garrucho; don Antonio Mateo Ruiz; don Emilio Hernández Jiménez; don Francisco García Aranda; don Antonio Miguel Royo Moralejo; don Francisco Arias García Villalba; don Ramón Unamuno Pérez; don José Luis García Martín; don Francisco Molina Contreras; doña Pilar Iglesias López; doña Ana Quesada Sedenó; don Juan Daniel Lanzas Muñoz; doña María Luisa Izquierdo Nadal; don Enrique Güell Figueras; don Bartolomé Valle Correyero; don Francisco Vidal Codina; don Lorenzo Manso Manso; don Manuel Herrero Alvarez; don Jaime Candanedo Gutiérrez; don Vicente López Faba; don Emilio Martín Medina; don José Luis Martínez Fernández; don Francisco Ovidio Navedo de la Cruz; don José Luis Sierra Díez; don Benildis Recio Guerra; don Rafael Demetrio Lafuente Duce; don Raimundo Viñado Arribas; doña Manuela Blasco Moreno; don Domingo Oliver Gimeno; don Pedro Casanovas Aranda; don Fernando Martínez de Salinas Medina; don José Luis Gómez Sabater; don Jesús Redondo Marco; doña Isabel Dueñas Sanjuán; don Luis Rafael Dufol Pallarés; don Miguel Gómez Mirón; doña Isabel Rama Píñilla; don José María Rodríguez Lama; doña Juliana García Beltrán; don Francisco González Crespo; don José Cerrato Fernández; don Juan Manuel Rojas Vinué; don Héctor González Almeida; don Pedro Félix Ramos Suárez; don Agustín Eugenio Diego Acosta; don Juan José Plasencia Plasencia; don Vicente Castro Barragán; don Alejandro Miguel Díaz Pazos; don Luis García Blanco; don Antonio Durán Avila; doña María Angeles Saz Fuertes; don Manuel Gimeno Minguez; don Félix Vara Estévez; don Francisco Ruiz Sanz; don Juan Noguera Martínez; don José Manuel Torres Gasco; don Manuel Santolaya Montoliu; doña Rita Campillo Ruiz; don Rafael Linares Albalat; don Fernando de Castro Montaner; don Fernando Monzonis Amorós; doña María Desamparados Llorente Cabrelles; don Francisco Santiago Muñoz Carrasco; don Marcial Llapaz Rico; doña Elisa Izquierdo Clemente; don Nicolás Navarro Salvador; don José María Sánchez Díaz; don Luis Rodríguez Nogueira; don Alfonso Rodríguez Fouces; doña Olga Gago Pazos; doña María del Carmen Carral Abelleira; doña María del Carmen García Alía; don José Ramón Abuin Morciras; don José Alfredo Seijas Sainz; doña María Cruz Rizo Fernández; don José Juan Freire Pérez; don José Espinosa García; don Julio Seijas Fernández; don José Miguel Sánchez Martínez; doña María del Amparo Abalo Vigo; doña Esperanza Carballas Meriño; doña María del Pilar Lejeren Buceta; don Manuel Rodríguez Seoane; don Jesús Calviño Pueyo; don Ramón Benito Blanco Vázquez; don Nemesio García García; don Alvaro Fonseca Moretón; doña María Josefa González Gutiérrez; doña María de las Nieves Sánchez Calero; don Santiago Pedro Cruz García; don Rafael López de Cervantes Castro; don Eduardo Morales Morales; don Juan Grande Arroyo; doña María de las Mercedes Fernández Luanco-Martínez; don José Mejías Fernández; doña Concepción Ortega Campos; don José María Valenzuela de la Iglesia; don Emilio Flores Callava; don Tomás Ortega Ruiz; don Antonio Arrabla Cruz; don José Luis Álvarez Saldaña; don Valentín Pérez García; don Aurelio Arango González; doña Guimar García Martínez; don Mariano Manuel Areas Maltada; don Valentín Fernández González; don Apolinar Alonso Rodríguez; don Uliano Pañeda Rodríguez; don Francisco Javier Alcalde Barrio; don Antonio Sánchez Muñoz; don Luis Dóejio Herrero; don Luis Chamorro Sánchez; don Julio Cano López; don José María Carrillo Almansa; don Ginés Lifante Lozano; don Eduardo Rosales Casado; don Francisco Javier Delgado Sainz; doña Mercedes Igualada Portales; don Pedro Noguera Massot; don José Luis Marques Torres; don José María Giménez Barga; don Antonio Salomó Lizcano; don Juan Pascual Gómez; don Angel Velasco Velasco; don José García Muñoz; doña María del Pilar ode la Fuente Gayoso; don José Alberto Iglesias Bourio; don Baldomero Rodríguez González; don Ignacio Avilez Manzanares; doña María de los Angeles Amarillo Doblado; doña María Fernanda García Morro; don Luis Cisnal Cregilla; doña Ascensión Diadosa Cabello; doña Soledad Casas Bran; doña María Valvanera Serrano Romero; don José Ramón Pellón Priego; don Bernardo Martínez Herrero; doña Ana María Fernández Ortega; don Antonio Badillo Rodríguez; doña María Alejandrina Herrera Roa; don Gustavo Miranda Pérez; doña Isabel Rodrigo Puertas; don Angel Alonso Morgado; don Juan Pérez Torrea; doña María

Gloria Carulla Fernández; doña María del Pilar Nieva Terceño; doña María Dolores Bernardina Hernández Garre; doña María Dolores Mollet Bazus; don José María Ferrero Ferrer; doña Elvira Molina Cortés; don José López Marín; don Manuel Salvador Delgado Izarra; don Fernando Ordóñez Badiola; don Gonzalo Corral Antón; don Alfredo Gallego Fraile; don Manuel Medina Torres y don Joaquín Izquierdo Sánchez, contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación del Decreto 1762/1982 del 24 de julio, del Ministerio de Hacienda, por el que se racionalizan y simplifican las Escuelas de Funcionarios del Instituto Nacional de Empleo y Acuerdo de Consejo de Ministros que por silencio administrativo lo confirma y fija la plantilla de personal del citado Instituto y se determinan sus derechos económicos con el nivel de proporcionalidad 8, grado inicial 1, correspondiente al coeficiente 3,3, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 4 de junio de 1985 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso formulado por don Atilano Martínez Tomé y demás recurrentes que figuran en el encabezamiento de esta sentencia, contra el Decreto de 24 de julio de 1982, todo ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y se insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Luis Vacas.—Pablo García.—Jesús Díaz de Lope-Díaz.—Ricardo Santolaya.—Luis Cabrerizo.—Firmados y rubricados.—Publicación: Leida y publicada ha sido la anterior sentencia, por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Luis Cabrerizo Botija, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha.—Certifico. José López Quijada.—Firmado y rubricado.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1976, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la correspondiente sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 2 de julio de 1985.—P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16915 *ORDEN de 3 de julio de 1985 por la que se concede a cada una de las Empresas que se citan, los beneficios fiscales a que se refiere el Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, sobre medidas de reconversión del sector textil.*

Ilmo. Sr.: En uso de lo previsto en el Decreto-Ley 9/1981, de 5 de junio, y disposición transitoria primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre medidas de reconversión industrial.

Este Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Tributos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, los beneficios definidos en el artículo 2.º del mismo y que recoge el Decreto Ley 9/1981, de 5 de junio, y la disposición transitoria primera de la Ley 27/1984, de 26 de julio, ha tenido a bien disponer:

Se conceden a las Empresas que al final se relacionan los siguientes beneficios fiscales:

Primero.—Uno. a) Bonificación del 99 por 100 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que graven los préstamos, empréstitos y aumentos de capital cuando su importe se destine a la realización de las inversiones en activos fijos nuevos de carácter industrial que sean exigidos por el proceso de reconversión.

b) Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, y recargo provincial, derechos arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, que no se fabriquen en España, realizadas por las Sociedades o Empresas que se hallan acogidas al plan de reconversión.

Los beneficios fiscales relativos a la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación serán aplicables a partir del primer despacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previs-